

Diciembre 2023

# DIPLOMACIA ECONÓMICA CANADIENSE, MINERÍA Y RACISMO EN TORNO A LA MINA ESCOBAL EN GUATEMALA

CAREN WEISBART, JENNIFER MOORE, CHARLOTTE CONNOLLY



Las autoras agradecen a Alejandra Henao, Shin Imai, Charis Kamphuis, Ellen Moore, Etienne Roy Grégoire, Teresa Velásquez y a quienes están a cargo de esta edición por su valiosa retroalimentación sobre este capítulo. Todo error es de nuestra responsabilidad. También agradecemos a todos que hicieron posible la traducción de este documento, incluyendo las siguientes organizaciones canadienses: El Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP por sus siglas en inglés), Derechos en Acción, El Fondo Humanitario de los Trabajadores Metalúrgicos Unidos (USW por sus siglas en inglés), el Fondo de Justicia Social de la Alianza de Servicios Públicos de Canadá (PSAC por sus siglas en inglés) y Alerta Minera Canadá, y al equipo de Alerta Minera Canadá por el diseño del documento y por alojarlo en su página web.

## **AUTORAS**

Caren Weisbart  
Jennifer Moore  
Charlotte Connolly

## **TRADUCCIÓN:**

Olimpia Boido

## **ACERCA DEL CAPÍTULO**

Publicación original en inglés: Weisbart, C., Moore, J. & Connolly, C. 2022. Qualifying as Canadian: Economic Diplomacy, Mining and Racism at the Escobal Mine in Guatemala. En *Capitalism & Dispossession: Corporate Canada at Home & Abroad*, Editores David P. Thomas y Veldon Coburn. Halifax y Winnipeg: Fernwood Publishing.

## **IMAGEN DE PORTADA**

Trabajadores agrícolas aran un terreno en San Rafael Las Flores con la mina de plata Escobal de Tahoe Resources (ahora Pan American Silver) al fondo. San Rafael Las Flores, Santa Rosa, Guatemala. 24 de septiembre de 2014. (James Rodríguez, Mimundo.org)

## CONTENIDO

Introducción	1
Minería canadiense en Guatemala	4
Diplomacia minera canadiense en América Latina	5
El complejo militar contrainsurgente de Guatemala y la promoción del diálogo canadiense	7
Intervenciones de la Embajada para asegurar y maximizar las ganancias de la empresa	9
¿Siempre hay una sola versión de una misma historia? Dimensiones paternalistas de las intervenciones diplomáticas de Canadá	11
Los negocios “en blanco” y la licencia de explotación de Escobal	14
La Oficina Interinstitucional y la Embajada	17
Tahoe Resources: un caso de identidad canadiense intermitente	20
Conclusión	23
Referencias	26

## Introducción

El 29 de abril de 2013, el entonces embajador de Canadá en Guatemala, Hugues Rousseau, fue fotografiado en una ceremonia de alto nivel celebrando la firma de un acuerdo voluntario entre la empresa minera Tahoe Resources y el gobierno guatemalteco. La ceremonia estuvo a cargo de Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala y ex general del ejército, conocido por su participación militar en el genocidio perpetrado contra la población indígena maya en la década de los 80 y por ser jefe de los servicios de inteligencia del ejército guatemalteco de 1992 a 1993 (Peacock y Beltrán 2003). Dos años más tarde, en 2015, se derrumbaría su gobierno debido a serios problemas de corrupción (Menchú y Pretel 2015). Tahoe se autodenominaba empresa canadiense y estaba registrada en la provincia de Columbia Británica, Canadá, con sede en Nevada, EE.UU. Durante la ceremonia, la empresa acordó el pago de regalías “voluntarias” a los municipios aledaños al proyecto de plata Escobal más allá del 0.5 por ciento que exige la ley guatemalteca tanto para el gobierno federal como para la municipalidad en donde opera. Lejos de ser ésta una celebración del compromiso de la empresa con el bienestar y la prosperidad económica de la población guatemalteca, su objetivo era brindar legitimidad a la inversión minera canadiense, la cual se encontraba sumida en controversias, valiéndose de una maniobra de relaciones públicas.

En este capítulo analizamos el decisivo apoyo de la Embajada de Canadá en Guatemala para la puesta en operación de la mina Escobal de Tahoe y, a su vez, la sutileza con que las autoridades canadienses se ampararon en la identidad canadiense de la empresa, o en su falta, dependiendo del contexto y de los intereses en juego. Por un lado, se la consideraba a Tahoe lo suficientemente canadiense como para acceder al apoyo del cuerpo diplomático norteamericano a la hora de evitar alzas en las tasas de regalías mineras en Guatemala y facilitar la adquisición de la licencia de explotación. Por otro lado, las autoridades canadienses indicaban que Tahoe era estadounidense y negaban tener influencia al surgir problemas en torno a la criminalización de protestas pacíficas y la violencia hacia comunidades. Al indagar sobre el carácter discriminatorio de la diplomacia canadiense en Guatemala se resalta el rol, si bien indirecto, que puede ejercer un gobierno extranjero en la consolidación de la violencia estructural y el racismo, posibilitando el tipo de daños que provoca la minería en las comunidades afectadas, ampliamente documentado en Guatemala y en otras partes de América Latina (Fløysand y Haarstad 2007 ; Nolin y Stephens 2010; Inter Pares 2009; Moore y Velásquez 2012; Schnoor 2013 ; Alerta Minera 2015a; Gordon 2016; Gordon y Webber 2016; Imai, Gardner y Weinberger 2017; Shipley 2017; Roy Grégoire 2019).

La ceremonia del 29 de abril ocurrió solo dos días después de que se abriera fuego ante una manifestación pacífica contra el proyecto Escobal de Tahoe

Resources. Las protestas iban en aumento luego de que, el 3 de abril de 2013, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala le otorgara a Tahoe la licencia de explotación. El mismo día de la aprobación, el Ministerio comunicó que no se tomarían en cuenta las más de 200 oposiciones que había presentado la población local por los posibles impactos de la minería en el agua, la salud y los medios de vida en una zona cuyas actividades son principalmente agrícolas y ganaderas (Solano 2015). Antes de otorgarse la licencia de explotación, las comunidades habían llevado a cabo consultas en los departamentos surorientales de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa y, en ellas, decenas de miles de personas votaron en contra de la mina de plata y de cualquier plan de expansión futura. Con la noticia de la aprobación de la licencia, se buscó realizar más consultas locales, e iniciar una protesta pacífica en las inmediaciones del yacimiento (Solano 2015).

Paralelamente, aumentaron la violencia y la represión hacia las manifestaciones pacíficas. El 27 de abril de 2013, los guardias de seguridad privada de Tahoe abrieron fuego contra manifestantes pacíficos en la entrada de la mina, hiriendo a siete hombres. El jefe de seguridad de Tahoe Resources en ese entonces era el ex oficial naval con entrenamiento de contrainsurgencia, Alberto Rotondo, de nacionalidad peruana. Las órdenes que dio a los guardias para atacar y deshacerse de las pruebas quedaron grabadas en escuchas telefónicas (Resist Escobal 2015a). Rotondo fue capturado y los comunitarios que resultaron heridos presentaron una demanda civil contra Tahoe Resources en los tribunales canadienses bajo cargos de negligencia y agresión física en 2014<sup>1</sup>.

Tres días después de la ceremonia de firma, el gobierno guatemalteco declaró el estado de sitio en los municipios cercanos al proyecto Escobal, suspendiéndose los derechos civiles, incluido el derecho a protestar y a celebrar reuniones públicas, y permitiéndosele a la policía realizar allanamientos y detenciones sin orden judicial. Se realizaron allanamientos de las viviendas de dirigentes de la resistencia, y varias detenciones que duraron meses (Solano 2015). Este fue solo un aspecto de la respuesta de tipo contrainsurgente del Estado guatemalteco (Granovsky-Larsen y Weisbart 2021), con el apoyo de Tahoe Resources, en aras de desarticular a la resistencia. Luego del estado de sitio, se mantuvieron en la zona dos destacamentos militares durante un período prolongado, y la llamada Oficina Interinstitucional para el Desarrollo Integral, creada por el Consejo Nacional de Seguridad de Guatemala en marzo de 2013, instaló una oficina en las cercanías de la mina. Más tarde se supo que esta última ejercía tareas de inteligencia militar (Solano 2015; Granovsky-Larsen y Weisbart 2021). El estado de sitio infundió suficiente temor a nivel local para acallar las protestas durante unos seis meses. Para enero de 2014, Tahoe Resources había logrado poner en operación a la mina Escobal.

---

1 García v. Tahoe Resources. 2014. Notice of Civil Claim. 18 de junio <[tahoeontrial.files.wordpress.com/2014/06/notice\\_civil\\_claim.pdf](http://tahoeontrial.files.wordpress.com/2014/06/notice_civil_claim.pdf)>.

En este capítulo, examinamos la influencia del cuerpo diplomático canadiense (lo que el Estado canadiense denomina “diplomacia económica”) en nombre de Tahoe Resources durante el período previo y posterior a estos eventos. Este período, entre 2012 y 2014, resulta crucial para comprender la resistencia continua del pueblo indígena Xinka representado por el Parlamento Xinka y sus vecinos en los municipios que rodean al proyecto Escobal, actualmente propiedad de la empresa Pan American Silver, con sede en Vancouver (Pan American Silver 2019a). También ilustramos las formas en que el Estado canadiense opera como administrador de riesgos para las depredadoras actividades del capital minero canadiense en el extranjero, permitiendo abusos corporativos y reforzando el racismo profundamente arraigado del Estado guatemalteco, al tiempo que pone al descubierto sus propias suposiciones paternalistas hacia los pueblos afectados que ejercen su autodeterminación. Comenzamos describiendo la manera en que Canadá aborda la política de diplomacia económica y resumiendo el trabajo de investigación, hasta la fecha, sobre las intervenciones de las embajadas de Canadá a favor de las empresas mineras en América Latina. Considerando la frecuencia con la que el Estado canadiense promueve el diálogo como una de las únicas soluciones ante la proliferación de conflictos y violencia en las minas canadienses, también resumimos un análisis crítico del diálogo canadiense en el contexto guatemalteco que contribuye a nuestra exploración de la evidencia empírica sobre el papel de la Embajada en este caso.

Nuestro análisis se basa en la información proveniente de la revisión de miles de páginas de registros de la Embajada suministrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá (GAC por sus siglas en inglés) en respuesta a las solicitudes amparadas en la Ley de Acceso a la Información que realizamos las autoras y una estudiante de derecho canadiense que forma parte del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa<sup>2</sup>. Estos registros proporcionan información sobre el decisivo rol de la Embajada de Canadá, mucho más allá de asistir a la ceremonia de firma en abril de 2013, para presionar contra las acciones del gobierno que podrían haber reducido las ganancias de Tahoe, para ayudar a la empresa a obtener la licencia de explotación en 2013 y para permanecer en silencio al aumentar la violencia y la militarización. Concluimos con una discusión sobre las suposiciones racistas y paternalistas que sustentan la diplomacia económica canadiense, como ilustra este caso, favoreciendo los intereses económicos transnacionales y sin tomar en cuenta la violencia militarizada que acompaña a los proyectos mineros.

---

2 El Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP por sus siglas en inglés) es un bufete jurídico en Canadá que colabora con estudiantes de derecho en Canadá y en el extranjero para brindar apoyo legal a comunidades afectadas negativamente por la extracción de recursos <[www.justice-project.org](http://www.justice-project.org)>. Alejandra Henao llevó a cabo la primera revisión y análisis de gran parte de los documentos que aquí se citan como parte de su labor académica en la Facultad Derecho de la Universidad Thompson Rivers y bajo la supervisión de la dra. Charis Kamphuis.

## Minería canadiense en Guatemala

Los inversionistas canadienses han ejercido un rol central en la apertura del sector minero a gran escala en Guatemala. El proceso comenzó a mediados de la década de los 90 al introducirse reformas neoliberales en el código minero del país, poco después de la firma de los Acuerdos de Paz de 1996 entre el Estado y las fuerzas guerrilleras que puso fin a los treinta y seis años de conflicto armado interno. El primer proyecto en entrar en operaciones fue el de Marlin en 2005. La mina a cielo abierto de oro y plata en las tierras altas del noroeste gozó del respaldo de la Embajada de Canadá y del Banco Mundial en un contexto de represión violenta y amplia oposición de las comunidades indígenas<sup>3</sup>.

Los actores clave de la puesta en operación de la mina Marlin luego fundaron Tahoe Resources y desarrollaron la mina Escobal. Kevin McArthur fue presidente de Glamis Gold, la empresa que puso en operaciones a la mina Marlin antes de que fuese adquirida por Goldcorp en 2006. Goldcorp fue una importante empresa aurífera canadiense, propietaria de la mina Marlin, hasta que se fusionó con Newmont en abril de 2019. McArthur se retiró de su función de presidente y CEO de Goldcorp a finales de 2008 y tomó esos mismos cargos en Tahoe Resources en 2009 (Bouw 2010), haciendo de esta última básicamente una empresa derivada de Goldcorp. Tahoe se decía ser una empresa canadiense, pero estaba registrada en Columbia Británica con tan solo un apartado postal mientras su oficina central se ubicaba en Reno, Nevada. Cotizaba en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York y adquirió el proyecto Escobal de Goldcorp a mediados de 2010. El yacimiento Escobal se considera uno de los depósitos de plata primaria más grandes del mundo, con reservas de 264 millones de onzas de plata (Pan American Silver s.f.). La vida útil de la mina subterránea, ubicada en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa, se estima en un mínimo de veinte años (M3 2014). Forma parte de un proyecto mucho más grande que abarca veintiuna concesiones mineras, cada una en diferentes etapas de aprobación, con una extensión de 1,290 kilómetros cuadrados en los departamentos de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa (M3 2014). Como parte de la compra de Escobal, Goldcorp se convirtió en el principal accionista de Tahoe, con el derecho de nombrar a tres directores para la junta directiva de la empresa, dato que figuraba en los cálculos del servicio exterior canadiense para determinar la admisibilidad de la empresa al apoyo diplomático. Incluso luego de que Goldcorp vendiera las acciones de Tahoe Resources en junio de 2015, la mitad de la junta directiva de Tahoe aun mantenía relaciones con Goldcorp o su predecesora, Glamis Gold, y por lo tanto tenía conocimiento sobre cómo influir en el contexto político y regulatorio de Guatemala. Escobal fue el buque insignia de Tahoe hasta que Pan American Silver adquirió a la empresa.

---

3 *Imai v. Global Affairs Canada* 2019. Declaración jurada de Shin Imai. 30 de agosto.

Los requisitos laxos de cotización en Canadá brindan a empresas de todo el mundo la posibilidad de generar capital con facilidad en la bolsa de valores y de recibir apoyo político del Estado canadiense, incluso cuando las empresas multinacionales no tienen operaciones ni personal en Canadá (Dougherty 2016; Denault y Sacher 2012). Como se demuestra en este trabajo, la identidad canadiense de Tahoe, si bien limitada, le posibilitó el decisivo apoyo de la Embajada entre 2012 y 2014 para maximizar las ganancias de la empresa y poner en funcionamiento a la mina Escobal. Tras una serie de incidentes violentos ampliamente difundidos, entre 2012 y 2013, incluido el tiroteo contra manifestantes pacíficos a la entrada de la mina en abril de 2013 y la posterior militarización del área, Tahoe perdió su admisibilidad al Servicio de Delegados Comerciales de Canadá en septiembre de 2013, lo que redujo el apoyo del Estado canadiense a su disposición<sup>4</sup>. La justificación oficial del servicio comercial se centró en los “mínimos” lazos económicos que mantenía la empresa con Canadá y los limitados recursos de la Embajada de Canadá en Guatemala, y no la violencia asociada a las operaciones de la empresa<sup>5</sup>. Sin embargo, el apoyo de la Embajada a la empresa en ningún momento cesó por completo, como lo demuestra la evidencia obtenida gracias a la Ley de Acceso a la Información. A continuación, repasamos lo que se conoce sobre la diplomacia económica canadiense al servicio de las empresas mineras en América Latina.

## Diplomacia minera canadiense en América Latina

La lógica neocolonial que impregna las acciones del cuerpo diplomático canadiense facilita la imposición violenta del capital minero proveniente de ese país en muchas partes de América Latina. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá (2020), el país norteamericano se ha “despojando de su legado colonialista” y cuenta con un servicio exterior que “rinde por encima de las expectativas”. Si bien ese legado persiste en nuestro parecer, el alcance de este país en la minería globalizada es verdaderamente notable. Casi la mitad de las empresas mineras del mundo que cotizan en bolsa lo hacen en bolsas de valores canadienses, y el capital que recauda esta industria en Canadá es mayor al de cualquier otro país (TMX Group 2020). Desde el 2007, el servicio exterior canadiense utiliza un enfoque “integral” en la promoción y protección del comercio y la inversión directa de ese país (Canadá 2009a). La diplomacia económica forma parte de esta estrategia expansiva en la que “[se] hace uso de todo recurso diplomático del Gobierno de Canadá a favor del éxito comercial de empresas e inversionistas canadienses” (Kamphuis 2018: 1).

---

4 Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá (GAC por sus siglas en inglés). Archivo de solicitud de acceso a la información (SAI) A201501699: 41-44.

5 GAC. Archivo de SAI A201900012: 94-95.



La documentación sobre la actividad diplomática del gobierno de Canadá con relación a la minería demuestra que ha dificultado sistemáticamente la autodeterminación de las comunidades indígenas y campesinas que se oponen a proyectos mineros (CIDH 2014), exacerbando el conflicto y el riesgo que corren quienes defienden la tierra y el medio ambiente. Por ejemplo, en México, la Embajada de Canadá colaboró estrechamente con las empresas canadienses Blackfire y Excellon con objeto de garantizar la continuidad de los proyectos al tiempo que las comunidades y los trabajadores cuestionaban los impactos negativos de las minas. La Embajada les facilitó a estas empresas el acceso a autoridades gubernamentales e intervino en su nombre a pesar de estar al tanto de las amenazas de represión y violencia selectiva que sufría la población local (Alerta Minera 2013a, 2015b). En el caso de Blackfire, esto llevó a una denuncia formal presentada en Canadá en la que se solicita una investigación sobre las acciones y omisiones de la Embajada, alegando que éstas aumentaron el riesgo que corría la vida del dirigente comunitario Mariano Abarca, que resultó asesinado<sup>6</sup>.

El cuerpo diplomático canadiense también interviene en políticas a favor de mineras. Studnicki-Gizbert (2016: 104) observa las formas en que los servicios consulares canadienses en toda América Latina ayudaron a desarrollar o promover leyes y políticas que protegen las inversiones mineras. En las décadas de los 80 y los 90, esto incluyó los “planes de ajuste estructural, alentando a los países latinoamericanos a firmar decenas de acuerdos de protección de la inversión extranjera y acuerdos de libre comercio”. En casos más recientes en Ecuador y en Honduras luego del golpe, el gobierno de Canadá se sirve de la estrategia “integral” para circunscribir las demandas de movimientos sociales al evitar moratorias o prohibiciones a la minería y garantizar la compatibilidad de las reformas de leyes mineras con los intereses de la industria (Moore y Velásquez 2012; Alerta Minera 2015a; Gordon y Webber 2016; Shipley 2017).

A diferencia de su voluntad de intervenir en nombre del capital minero, las embajadas canadienses dan la espalda ante acusaciones fiables de abusos y amenazas a defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente en conflictos mineros indicando que no pueden interferir con la soberanía de otras naciones (Moore 2013) o, como ocurre en el caso de Tahoe Resources, que la empresa no es lo suficientemente canadiense como para justificar el involucramiento de la Embajada. Al refugiarse tras este velo de restricción diplomática, Canadá les niega apoyo a las comunidades que luchan contra los daños de la minería, consolidando la impunidad de abusos corporativos y regímenes autoritarios (Gordon y Webber 2016; Kamphuis 2018). A cambio, Canadá gestiona los riesgos de las empresas, no los de las comunidades, a través de medidas voluntarias y la “promoción del diálogo” (Kamphuis 2012; Roy Grégoire 2019).

---

6 *Abarca Family v. Attorney General of Canada* 2019 FC 950. Corte Federal de Canadá.

## El complejo militar contrainsurgente de Guatemala y la promoción del diálogo canadiense

En Guatemala, Canadá ha brindado apoyo diplomático a empresas mineras a pesar de las exhaustivas pruebas de la corrupción profundamente arraigada y del papel que desempeñaron autoridades gubernamentales en el genocidio contra los Pueblos Indígenas en las décadas de los 70 y los 80 (Peacock y Beltrán 2003; Solano 2005; Doyle 2012). Las autoridades canadienses persisten en incidir enérgicamente en nombre de las mineras de Canadá, sabiendo del aumento de violencia y conflicto en los proyectos<sup>7</sup>, incluyendo amenazas, tiroteos, asesinatos, persecución judicial, violaciones y despliegues militares con objeto de quebrantar a quienes defienden la tierra y el medio ambiente (Amnistía Internacional Canadá 2016). En este contexto de apoyo estatal a intereses empresariales, Canadá promueve el diálogo como su principal respuesta ante la continuidad del conflicto sociohistórico.

El gobierno canadiense fomenta una noción neoliberal del “diálogo” para gestionar los riesgos que afrontan las inversiones canadienses al surgir picos de violencia y criminalización contra comunidades afectadas (UDEFEQUA 2010, 2017). En su análisis del diálogo que Canadá promueve en Guatemala, Roy Grégoire (2019: 688) indica que “le hace eco a elementos centrales de la dinámica política del posconflicto en Guatemala ... [contribuyendo] a la consolidación de mecanismos represivos, que debilitan los avances hacia la democratización y le quitan legitimidad a los reclamos de derechos humanos”. Grégoire examina las suposiciones racistas y patriarcales dominantes que utiliza la élite económica de Guatemala, la cual goza de vínculos históricos con la extrema derecha de ese país y los regímenes militares represivos que participaron en la violencia genocida (Casaús Arzú 2010; Solano 2011; Roy Grégoire 2019). Según el autor, estas suposiciones tienden a caracterizar a la resistencia indígena y campesina como anti-desarrollo, irrazonable y subversiva, con vínculos ostensibles con el crimen organizado. En su análisis del vínculo entre el discurso canadiense sobre el diálogo y estas suposiciones, indica:

En primer lugar, ambos sistemas normativos consideran ilegítimos al conflicto y a los intereses divergentes. En ambos casos, el “desarrollo” simboliza los “intereses irrefutables y universalmente compartidos”. En segundo lugar, ambos comparten la noción de que el conflicto se deriva de suposiciones erróneas por

---

7 GAC. Archivo de SAI A201301117: 165; *German Chub Choc v. Hudbay Minerals Inc. and Compania Guatemalteca de Niquel S.A.* archivo de la corte No. CV-11-435841 <<http://www.chocversushudbay.com/wp-content/uploads/2010/11/Chub-v-Hudbay-Statement-of-Claim-updated-Oct-2013.pdf>>; *Angelica Choc, individually, and as a personal representative of the estate of Adolfo Ich Chaman, deceased v. Hudbay Minerals Inc., HMI Nickel Inc, and Compania Guatemalteca de Niquel S.A.*, archivo de la corte No CV-IO-411159 <[chocversushudbay.com/wp-content/uploads/2010/11/Choc-v-Hudbay-Statement-of-Claim-updated-Oct-2013.pdf](http://www.chocversushudbay.com/wp-content/uploads/2010/11/Choc-v-Hudbay-Statement-of-Claim-updated-Oct-2013.pdf)>; *Margarita Caal Caal Rosa Elbira Coch Ich, Olivia Asig Xol, Amalia Cac Tiul, Lucia Caal Chijn, Luisa Caal Chtn, Carmelina Caal Ical, Irma Yolanda Choca Cac, Elvira Choc Chub, Elena Choc Quib and Irma Yolanda Choc Quib v. Hudbay Minerals Inc. and HMI Nickel Inc.* <[chocversushudbay.com/wp-content/uploads/2010/11/Amended-Statement-of-Claim-Caal-v.-HudBay-FILED.pdf](http://www.chocversushudbay.com/wp-content/uploads/2010/11/Amended-Statement-of-Claim-Caal-v.-HudBay-FILED.pdf)>.

parte de los oponentes. A pesar de que el Estado canadiense atribuye estos malentendidos a “problemas de comunicación” y no a la condición inhumana de los pueblos indígenas [sic], sigue habiendo una suposición subyacente en la política canadiense [de Responsabilidad Social Corporativa] de que el conflicto se debe, en el fondo, a las percepciones erróneas de los miembros de la comunidad. En tercer lugar, ambos sistemas sostienen que el conflicto es el resultado de la manipulación de terceros, por ejemplo, las ONG ambientales que se oponen a la minería. (Roy Grégoire 2019: 693).

En general, Canadá se sirve del concepto de diálogo para “aumentar la ventaja competitiva de las empresas canadienses en el sector extractivo internacional reforzando su capacidad en la gestión de riesgos sociales y ambientales” (Canadá 2009b) en lugar de prevenir daños sociales y ambientales, como observa Roy Grégoire (2019). En el contexto del posconflicto en Guatemala, el diálogo canadiense también se inserta en el racismo profundamente arraigado y la violencia estructural que caracteriza el modus operandi de las altas esferas del gobierno guatemalteco y de grupos armados clandestinos locales, que compiten por el control de territorios estratégicos. Como resultado, la política de promoción del diálogo limita el enfoque en la responsabilización de empresas canadienses por los abusos que ocurren y fomenta un mayor menosprecio por la población indígena y campesina, ocasionándole daños irreparables que se conciben como uno de los costos de hacer negocios.

El legado del conflicto armado interno es patente en conflictos mineros contemporáneos como el que se destaca en este capítulo. Si bien los Acuerdos de Paz de Guatemala se firmaron en 1996, el complejo militar contrainsurgente continúa operando al interior del gobierno y del ejército guatemaltecos (Peacock y Beltrán 2003; Casaús Arzú 2010; Solano 2011), influyendo en las tácticas y estrategias para gestionar la protesta y la disidencia contra la minería (Granovsky-Larsen 2018). La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (United States Institute for Peace 1997) concluyó que el ejército guatemalteco fue responsable por la muerte de más de 150,000 civiles, en su mayoría del Pueblo Indígena Maya, durante treinta y seis años de violencia armada. El hecho que no se hayan reformado las instituciones estatales en el posconflicto contribuye a la continua operación clandestina de redes del crimen organizado vinculadas a las mismas estructuras militares y policiales históricas que perpetraron el genocidio en Guatemala (Peacock y Beltrán 2003).



Foto: Puesto de control entre San Rafael Las Flores y Mataquesuintla el primer día del estado de sitio declarado en cuatro municipios. Mataquesuintla, Jalapa, Guatemala. 2 de mayo de 2013. (James Rodríguez, Mimundo.org)

Canadá es consciente de este legado continuo y, como tal, fue uno de los principales financiadores y partidarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un emprendimiento altamente efectivo que ha cesado de existir<sup>8</sup>. La misión de la CICIG consistía en descubrir e investigar “cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala”, incluida la identificación de sus vínculos con funcionarios del Estado (CICIG 2018). Dada la situación, resulta problemático que la Embajada de Canadá también apoye los intereses mineros canadienses cuyas operaciones son posibles y se benefician directamente de una mayor militarización local y regional, de la estrecha colaboración entre las fuerzas de seguridad privadas y estatales (Prensa Libre 2013; Laplante y Nolin 2014), y de la existencia de relaciones político-económicas clandestinas (Solano 2005). En su conjunto, estos factores perpetúan la violencia estatal contra la población indígena. Antes de brindar apoyo a Tahoe Resources, la Embajada de Canadá respaldó activamente las operaciones no deseadas de Goldcorp en la mina Marlin (Alerta Minera 2015a)<sup>9</sup> y negó la complicidad de una empresa canadiense en la violencia brutal contra comunidades del pueblo Maya Q’eqchi’ en torno a la mina de níquel Fénix (*Schnoor v. Canada* 2009).

En las siguientes secciones, partiendo de los documentos obtenidos mediante la Ley de Acceso a la Información, detallamos el decisivo apoyo de la Embajada de Canadá a Tahoe Resources en el período previo y posterior a la puesta en operación de la mina Escobal, a pesar de la amplia resistencia local por los posibles impactos de la minería en el agua, la salud y los medios de vida.

## Intervenciones de la Embajada para asegurar y maximizar las ganancias de la empresa

Para el 2012, la oposición local al proyecto Escobal iba en aumento y la empresa sentía preocupación por la tardanza del permiso de explotación. La Embajada sabía de la resistencia local, pero le restaba importancia. En esos tiempos, Nathalie Samson, encargada de negocios, indicó por correo electrónico a colegas de la Embajada y del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá (DFAIT, actualmente Ministerio de Asuntos Exteriores) que las protestas comunitarias “se organizan fácilmente pagándole a la gente y distribuyendo desayuno y almuerzo a cualquiera que quiera participar... no hay necesidad de tener una opinión de nada para caminar, sentarse en algún lugar en autobús y ‘protestar’”<sup>10</sup>. Lo que más le preocupaba a la Embajada

---

8 En 2019, el presidente guatemalteco Jimmy Morales se negó a renovar el mandato de la CICIG. En su último informe, la CICIG indicó que “existe una ‘coalición mafiosa’ entre autoridades, empresarios y particulares que está ‘dispuesta a sacrificar el presente y futuro de Guatemala para garantizarse impunidad y preservar el *statu quo*.” (Associated Press en Ciudad de Guatemala 2019).

9 *Imai v. Global Affairs Canada* 2019. Declaración jurada de Shin Imai. 30 de agosto.

10 GAC. Archivo de SAI A201301117: 63–64.

era la posible reducción de las ganancias para la industria debido a una propuesta para la participación del Estado en la minería.

El 27 de junio de 2012, el gobierno de Otto Pérez Molina anunció reformas constitucionales para permitirle al Estado adquirir hasta un 40 por ciento de participación en proyectos extractivos. Según funcionarios de la Embajada, el gobierno buscaba establecer una empresa minera estatal y aumentar los pagos de regalías. La Embajada de Canadá coordinó con la Cámara de Comercio Guatemalteco-Canadiense (CANCHAM) y otras asociaciones de la industria para detener las medidas propuestas. En un correo del 29 de junio de 2012, Samson informó a sus colegas:

El presidente de la Cámara de Industria [Guatemalteca] — CACIF— se reunió ayer directamente con el presidente [guatemalteco] para informarle que el sector privado no apoyaría tal propuesta. CANCHAM y otras cámaras de comercio bilaterales, principalmente de Estados Unidos, Francia, India, Alemania, se están organizando para transmitir los mismos mensajes<sup>11</sup>.

Aproximadamente una semana después, funcionarios de la Embajada indicaron que, según autoridades guatemaltecas, la medida no se aplicaría a operaciones existentes<sup>12</sup>. El 6 de julio, Robert Shaw-Wood, subdirector de relaciones comerciales y de inversión entre Canadá y América Latina, se comunicó por correo electrónico con la Embajada y con el DFAIT para señalar que habría consultas con las partes interesadas, incluida la industria minera, antes de enviarse las reformas propuestas al Congreso. Agregó: “La Embajada está indagando sobre los detalles y las implicancias, en caso de haberlas, para las operaciones canadienses”<sup>13</sup>.

El 13 de julio, la encargada de negocios, Nathalie Samson informó sobre el estado de las inversiones canadienses a la Embajada y al DFAIT, indicando que, partiendo de los datos disponibles el 9 de julio, las mineras canadienses activas en Guatemala habían perdido entre el 15 y el 20 por ciento de su valor de mercado. Afirmó que Tahoe había “recibido el golpe más duro” y que la venían observando inversionistas, fondos de inversión, analistas y gerentes ya que la mina Escobal se considera “un proyecto emblemático en Guatemala”<sup>14</sup>. El 26 de julio, las Embajadas de Canadá y Estados Unidos enviaron al presidente Pérez Molina una carta conjunta sobre Tahoe cuyo contenido está censurado<sup>15</sup>.

---

11 A201301117: 3.

12 A201301117: 53.

13 A201301117: 53.

14 GAC. Archivo de SAI A201702339: 160-61.

15 GAC. Archivo de SAI A201301117: 80.

El 23 de agosto, la prensa informó que el presidente Pérez Molina daría marcha atrás a la propuesta de reformas constitucionales. Suzan Redwood, asesora principal de incidencia del DFAIT, le escribió a Ottawa, afirmando que se había dado marcha atrás a las reformas “debido a las grandes inquietudes que generó para inversionistas extranjeros y la comunidad empresarial local”<sup>16</sup>. Además, comentó sobre el impacto de la respuesta coordinada de la Embajada con asociaciones de la industria y cámaras de comercio:

Las partes interesadas ... coordinaron con las Embajadas de Canadá y Estados Unidos, alertando a las autoridades pertinentes del gobierno guatemalteco sobre la situación. ... Las cartas y las reuniones, desde y a varios niveles, influyeron en el cambio mencionado.

Las intervenciones de la Embajada y de la industria tuvieron el efecto deseado, aunque las inquietudes sobre aumentos de las tasas de regalías y el impacto que esto podría ocasionar para Tahoe Resources volverían a aflorar. Por lo pronto, la Embajada se enfocó en apoyar a la empresa para obtener la licencia de explotación y poner en funcionamiento la mina Escobal. La siguiente sección brinda ejemplos de la participación continua de la Embajada para garantizar el éxito del proyecto, y de la forma en que se ignoró la resistencia de grupos indígenas y campesinos, desprestigiándose sus inquietudes.

## **¿Siempre hay una sola versión de una misma historia? Dimensiones paternalistas de las intervenciones diplomáticas de Canadá**

Durante el resto de 2012 y principios de 2013, Canadá demostró un compromiso entusiasta con Tahoe y organizó una serie de intercambios diplomáticos de alto nivel. Estos incluyeron visitas del exdiplomático y consultor de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) Louis Guay y del gobernador general de Canadá David Johnston a finales de 2012. Mientras que no hay evidencia de que la Embajada cuestionara el acceso de Tahoe a su Servicio de Delegados Comerciales en ese momento, sí se utilizaron los estrechos vínculos que la empresa mantenía con Canadá como excusa para desestimar las llamadas de apoyo de las y los defensores de la tierra y el agua en el contexto de la intensificación de la criminalización y las amenazas.

Hacia fines de 2012, la Embajada preparó una nota informativa para un “almuerzo de trabajo con expertos sobre el desarrollo del sector extractivo en Guatemala” en donde se refiere a Tahoe Resources como una “empresa canadiense”<sup>17</sup>. También

---

16 GAC. Archivo de SAI A201501699: 57.

17 GAC. Archivo de SAI A201301117: 170.

Foto: Las comunidades organizan una marcha pacífica hacia la entrada de la mina Escobal y posteriormente hacia la Embajada de Canadá en Guatemala, depositando flores en ambas entradas como gesto simbólico de la oposición pacífica a las actividades mineras en el departamento. (Madre Selva)



describe las recientes protestas contra el proyecto Escobal, e indica que al menos cinco personas resultaron heridas durante la consiguiente represión policial. Previo a las visitas diplomáticas, en septiembre de 2012, un grupo de organizaciones norteamericanas de la sociedad civil envió una carta a las autoridades canadienses en Ottawa y en Ciudad de Guatemala destacando la preocupante criminalización de quienes defienden la tierra y el medio ambiente y condenando las tácticas de presión de Tahoe para acelerar la aprobación de su licencia de explotación a costa del bienestar local<sup>18</sup>. En su respuesta, funcionarios del DFAIT expresaron que Canadá espera de las empresas canadienses el respeto de la legislación aplicable con la salvedad de que “no se puede responsabilizar a una empresa estadounidense ante las políticas del Gobierno de Canadá”<sup>19</sup>.

En octubre de 2012, el consultor de RSC Louis Guay estuvo en Guatemala y visitó el proyecto Escobal mientras cumplía un contrato con el DFAIT<sup>20</sup> para elaborar un plan de RSC para Centroamérica y el Caribe basado en la estrategia “Reforzar la ventaja canadiense” [“Building the Canadian Advantage”] (Canadá 2009b)<sup>21</sup>. Al llegar, Guay cenó con representantes del gobierno guatemalteco, incluidos el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente y la Comisión de Energía y Minas. Otro invitado notable fue el alcalde de San Rafael Las Flores, el municipio donde Tahoe Resources buscaba construir la mina Escobal, que venía rechazando las solicitudes de su electorado de realizar un plebiscito municipal sobre la minería<sup>22</sup>. Guay pasó el día siguiente con funcionarios de la Embajada, visitando el yacimiento de Escobal y sus alrededores para conocer los planes de la empresa.

18 A201301117: 105–6.

19 A201301117: 111.

20 GAC. Archivo de SAI A 2015-01701: 15–24

21 GAC. Archivo de SAI A201301117: 177.

22 GAC. Archivo de SAI A201602500: 1–6.

En un informe de la Embajada elaborado luego de la visita de Guay se describe a la opinión “anti-minera” como un producto de la falta de información y de la manipulación de terceros y no como una verdadera preocupación por los posibles impactos de la minería:

Las malas experiencias históricas, ya sea de hidroeléctricas, petroleras o empresas mineras, que forman parte de la historia nacional y la reciente guerra civil, todavía conllevan a una desconfianza general, a *conceptos erróneos y al resentimiento*. La tenencia de la tierra, el medio ambiente y las formas de vida tradicionales forman la base de muchas reivindicaciones y protestas de derechos humanos, más que a menudo, *manipuladas por objetivos políticos, económicos e individuales....* A finales de 2012 se produjeron más actividades y un mayor nivel de violencia que condujo a la quema de equipos y demás. *Lamentable, ya que sucedió solo unos meses después de que el obispo les dijera a los curas que ya no hablaran de la minería en la iglesia*<sup>23</sup>. (sin resaltar en el original)

Esta descripción se hace eco de muchas de las suposiciones racistas que utiliza la oligarquía guatemalteca en referencia a las comunidades en resistencia a la minería (Roy Grégoire 2019). En la última frase, se insinúa el papel de terceros y de la Iglesia Católica local en la manipulación de los Pueblos Indígenas, un estereotipo histórico del que se sirve con regularidad la oligarquía guatemalteca para “descartar la oposición indígena [sic] a los proyectos extractivos” (Roy Grégoire 2019: 690). La “quema de equipos” mencionada probablemente se refiera al incidente de noviembre de 2012, en el cual Tahoe señaló a la dirigencia de la resistencia local como responsable por el robo de explosivos de un camión y la quema de seis vehículos y una casa. Los explosivos no volvieron a aparecer, pero se inició proceso legal contra dieciocho líderes locales (Solano 2015: 14-15). Los miembros de la comunidad creían que fue todo un montaje para justificar una campaña de criminalización cada vez más intensa en su contra. Más tarde fueron absueltos por falta de pruebas.

En este contexto de conflicto cada vez mayor, la Embajada continuó cabildando a favor de Tahoe con la visita en Guatemala del gobernador general Johnston del 5 al 7 de diciembre de 2012. El objetivo de su visita era destacar las prioridades canadienses, incluyendo la experiencia y conocimientos que las empresas canadienses pueden ofrecer en los sectores de minería y seguridad<sup>24</sup>. El gobernador general tuvo tiempo para un desayuno de mesa redonda con líderes empresariales; sin embargo, a un representante del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) que trabajaba con comunidades afectadas por el proyecto Escobal en ese momento se le negó una entrevista debido a la supuesta falta de disponibilidad del gobernador general<sup>25</sup>.

---

23 GAC. Archivo de SAI A-2015-01701: 95-96.

24 GAC. Archivo de SAI A201301117: 146-47.

25 A201301117: 125-45.



El 6 de diciembre, durante la estadía de Johnston en el país, se llevó a cabo una protesta pacífica frente a la Embajada denunciando las violaciones de derechos humanos de las mineras canadienses Tahoe Resources y Goldcorp<sup>26</sup>. Según informó Nathalie Samson, encargada de negocios de la Embajada, unas 50 personas se manifestaron con consignas como “Las mineras canadienses destruyen el tejido social”, “Minas canadienses: déjenos en paz” y “La gente de Santa Rosa y Jalapa dice NO a la mina”<sup>27</sup>. A su vez, CALAS entregó una carta dirigida al gobernador general describiendo los conflictos que ocasionan la mina Marlin de Goldcorp y el proyecto Escobal de Tahoe, incluyendo la indiferencia hacia el voto local contra la minería, y la criminalización de la dirigencia comunitaria<sup>28</sup>. Después de reunirse con el presidente guatemalteco, el gobernador general Johnston insistió durante una entrevista con un periódico local que estos conflictos eran producto de una percepción errónea y que el diálogo era clave para su resolución: “Lo que le diría a cualquier empresa minera y a cualquier grupo local de Guatemala es que se sienten con todos los jugadores, incluidos los promotores mineros, y satisfacerse ellos mismos de que esto será bueno para su comunidad. Estoy convencido de que en la mayoría de los casos, con toda la información sobre la mesa, dirán: Esta es la clase de sociedad que queremos para nuestra comunidad” (Contreras 2012: 6). Según el gobernador general, el diálogo solo podría llevar a un único resultado. En sus comentarios se manifiesta el enfoque paternalista del Estado canadiense con relación a los conflictos mineros, sin llegar a escuchar a las comunidades y a quienes las apoyan para comprender las realidades del día a día de quienes se resisten a los proyectos.

## Los negocios “en blanco” y la licencia de explotación de Escobal

A principios de 2013, continuó la oposición pacífica al proyecto Escobal mediante votaciones locales que organizaron las comunidades. En el municipio de San Rafael Las Flores, la resistencia decidió realizar votaciones a nivel comunitario dado que el alcalde se negó a celebrar un referéndum municipal. Se celebraron ocho entre febrero y abril de 2013. En las consultas se rechaza abrumadoramente la minería (JCAP 2017). La Embajada, conforme expresó el embajador en un correo electrónico en ese momento, era plenamente consciente de que la aprobación de la licencia de explotación de Tahoe podría conducir a una escalada del conflicto y a la militarización en el área, sin embargo, recibió la noticia al respecto como un gran logro.

El embajador Rousseau asistió a una conferencia de prensa y a la ceremonia del 3 de abril de 2013, en la que el ministro de Energía y Minas de Guatemala, Erick Archila, otorga la licencia de explotación de Escobal y desestima las más de doscientas oposi-

---

26 A201301117: 118.

27 A201301117: 121.

28 A201301117: 119–20.

ciones sobre los riesgos ambientales y de salud del proyecto sin considerarlas. En un correo posterior a sus colegas, el embajador Rousseau se refirió al esfuerzo compartido para lograr el avance de la empresa y anticipó más levantamientos: “La perseverancia de todos finalmente dio sus frutos hoy.... Esperamos un fuerte contragolpe de los grupos de la oposición, probablemente los tomó de sorpresa. Sin embargo, esta vez, tanto el Gobierno como las empresas están listos para defenderse con una enérgica campaña sobre los beneficios de las actividades responsables de la industria extractiva”<sup>29</sup>.

La Embajada estaba en lo cierto. La comunidad, indignada, reaccionó. Durante las siguientes tres semanas, la población local llevó a cabo cuatro votaciones sobre la minería en aldeas de San Rafael Las Flores para manifestar la oposición local y se organizó una protesta pacífica cerca del yacimiento. El 27 de abril de 2013, mientras un grupo de hombres de diferentes edades protestaba en la carretera frente a la entrada de la mina, salieron guardias de seguridad armados y abrieron fuego mientras los manifestantes huían (Resist Escobal 2015b). Siete hombres recibieron disparos, y dos resultaron heridos de gravedad y fueron hospitalizados (Cuffe 2013). Conforme indican escuchas telefónicas, Alberto Rotondo, jefe de seguridad de Tahoe, dio una serie de órdenes para el ataque utilizando expresiones y epítetos de índole racista (Resist Escobal 2015a) y fue arrestado por intento de homicidio y obstrucción de la justicia mientras intentaba huir del país (Cuffe 2013).

Por otro lado, la Embajada, la empresa y el gobierno guatemalteco intensificaron su “enérgica campaña”. El 29 de abril de 2013, dos días después del tiroteo, el embajador Rousseau participó como invitado de honor en la firma pública del pacto entre el gobierno guatemalteco y Tahoe Resources para aumentar voluntariamente los pagos de regalías del 1 al 5 por ciento (MiMundo.org 2013). La empresa también ofreció pagos anuales a los municipios en las inmediaciones de San Rafael Las Flores buscando mantener buenas relaciones con los gobiernos a nivel local y nacional; sólo unos pocos aceptaron los fondos. La violencia que transcurrió días antes de la ceremonia de firma se barrió bajo la alfombra hasta que el incidente se convirtió en objeto de una demanda civil de alto perfil en los tribunales de Columbia Británica.

Tres días después de la firma del acuerdo de regalías, el 2 de mayo de 2013, el gobierno guatemalteco declaró el estado de excepción en el área del yacimiento de plata de Tahoe, suspendiendo los derechos civiles, incluido el derecho a protestar o celebrar reuniones públicas, y permitiendo a la policía realizar redadas y detener a personas sin orden judicial (NISGUA 2013). El estado de excepción duró la mayor parte del mes de mayo, pero dos de los tres destacamentos militares que se instalaron en ese interín permanecieron activos aún después, y varios miembros de la resistencia fueron privados de libertad durante meses (Solano 2015). Asimismo, como se considera a continuación, el área se convirtió en la máxima prioridad de la flamante Oficina Interin-

---

29 GAC. Archivo de SAI A201501699: 55.



Foto: El embajador de Canadá en Guatemala, Hugues Rousseau, firma el acuerdo voluntario entre el gobierno de Guatemala y Tahoe Resources. Ciudad de Guatemala, Guatemala. 29 de abril de 2013. (James Rodríguez, Mimundo.org)

stitucional para el Desarrollo Integral, a cargo de un oficial militar y creada justo antes de la aprobación del permiso de la mina a fines de marzo de 2013. El proyecto Escobal quedó categorizado como “recurso natural estratégico”, convirtiendo a la oposición a la minería en un problema de seguridad nacional (Solano 2015).

A pesar de haberse realizado múltiples solicitudes conforme la Ley de Acceso a la Información para obtener registros del gobierno canadiense sobre la ceremonia de regalías voluntarias a la que asistió el embajador Rousseau en particular, no se otorgó información al respecto. Posteriormente, JCAP presentó una queja ante la Oficina del Comisario de Información alegando la imposibilidad de que no se hayan creado registros de un evento tan significativo<sup>30</sup>. La falta de registros da pie a inquietudes que van más allá del alcance de este capítulo pertinentes a deficiencias sistémicas en cuanto a la transparencia y la capacidad de la población de conocer las actividades de la Embajada en aspectos de diplomacia económica y en defensa de las empresas canadienses.

Entre los notablemente escasos registros disponibles de este tumultuoso y violento período, se encuentran varios vinculados a consultas de los medios en los que la Embajada caracteriza su papel como centrado y relativamente no intervencionista. Indicaba tener una relación con “todas las partes interesadas” en la que “se han llevado a cabo discusiones [regulares] con el personal administrativo de Tahoe y el personal superior de la Embajada [para mantener] canales de comunicación abiertos con grupos comunitarios locales”<sup>31</sup>. También indicó la intención de “observar la situación de cerca y

---

30 JCAP, 2017, Complaint to the Office of the Information Commissioner: Global Affairs Canada. 21 de septiembre.

31 GAC. Archivo de SAI A201301118: 20.

apoyar las iniciativas de diálogo<sup>32</sup>. Sin embargo, en las miles de páginas de registros gubernamentales que corresponden a este período, no se halló evidencia alguna de que la Embajada intentara recaudar información sobre quejas de la comunidad, y mucho menos investigarlas.

En julio de 2013, en respuesta a una acción de amparo referente a la licencia de explotación de Tahoe, la Corte de Apelaciones de Guatemala determinó que el Ministerio de Energía y Minas no había garantizado el debido proceso a las personas que presentaron recurso de oposición antes de su aprobación. La Embajada no mostró preocupación al respecto. Al recibir la noticia, Nathalie Samson, encargada de negocios, indicó en correos a colegas que CALAS, la ONG a cargo del caso, interpretaba erróneamente que esta decisión significaba que la mina debería suspender las operaciones. Informó que Tahoe Resources “continuará con las actividades según lo planeado previamente” y el Ministerio de Energía y Minas “apelaría esta decisión en lo que se convertiría un largo proceso legal<sup>33</sup>. La Embajada pareció reaccionar con serenidad ante las ilegalidades referentes a los permisos que se anunciaban en la decisión del tribunal, y no planteó inquietudes al haberse violado el derecho de la comunidad al debido proceso, ni sobre el aumento en la criminalización y militarización que afectaba a las comunidades. Más bien, los funcionarios canadienses parecían satisfechos de que la duración del proceso legal implicaba que no presentaría dificultades para que la mina de Tahoe entrara en funcionamiento en enero de 2014.

## La Oficina Interinstitucional y la Embajada

La violencia que se desató al cabo de la aprobación de la licencia de Tahoe el 3 de abril de 2013 está vinculada al establecimiento de la Oficina Interinstitucional para el Desarrollo Integral (Solano 2015). La Oficina consistía en un equipo cuasi militar a cargo de un coronel militar, y contaba entre sus miembros con oficiales militares retirados, incluido Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación en ese momento. López Bonilla no solo prestó servicio bajo el dictador genocida Efraín Ríos Montt durante el apogeo de la violencia en la década de los 80, también fue un estrecho aliado de Otto Pérez Molina desde ese momento (Solano 2011), incluso cuando Pérez Molina acató órdenes de ir a la región indígena Ixil que fue una de las más afectadas durante el genocidio. Al asumir Pérez Molina la presidencia, López Bonilla era considerado su “mano derecha” (Solano 2011: 2). Actualmente se encuentra vinculado a varios casos de corrupción (CICIG 2016) y Estados Unidos lo ha acusado por delitos de narcotráfico (Silva Ávalos 2017). Sin embargo, en 2013, mientras ejercía como ministro de Gobernación, fue uno de los principales contactos de la Embajada y un referente para una “propuesta de empre-

---

32 A201301118: 20.

33 GAC. Archivo de SAI A201301117: 269.



Foto: El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina (fila inferior, tercero desde la izquierda) posa con el alcalde de San Rafael Las Flores, Leonel Morales (fila inferior, segundo desde la izquierda), el vicepresidente de operaciones de la mina San Rafael, Donald Paul Gray (fila superior, primero desde la izquierda), el embajador canadiense Hughes Rousseau (fila superior, quinto desde la izquierda) y otros alcaldes de municipios adyacentes a la mina San Rafael, luego de la firma del acuerdo voluntario entre el gobierno de Guatemala y Tahoe Resources. Ciudad de Guatemala, Guatemala. 29 de abril de 2013. (James Rodríguez, Mimundo.org)

sas mineras para defensa y seguridad”<sup>34</sup>. La Oficina Interinstitucional fue inaugurada oficialmente el 26 de marzo de 2013, una semana antes de la aprobación de la licencia de explotación. Los registros obtenidos mediante la Ley de Acceso a la Información demuestran que la Embajada sabía de la oficina y de su relación con Tahoe.

La noticia de una comisión militarizada dirigida por un ex general del ejército e instalada en las cercanías de la mina Escobal le debería haber suscitado inquietudes a la Embajada dada la trayectoria del gobierno canadiense en el apoyo y financiamiento de instituciones clave de derechos humanos en Guatemala y su extenso conocimiento sobre los duraderos legados del genocidio de las décadas de los 70 y los 80, incluida la corrupción, sumamente arraigada, en el gobierno. Un mes después de su creación, guardias de seguridad privada abrieron fuego contra manifestantes pacíficos y se declaró el estado de excepción en la región suspendiéndose las libertades civiles. Incluso en ese momento, Canadá no respondió a los planteamientos sobre derechos humanos provenientes de la población local y de organizaciones guatemaltecas e internacionales. La inacción del Estado canadiense durante este intenso período de violencia permitió la brutalidad de las fuerzas policiales públicas y privadas y demuestra con incluso más claridad la prioridad que acuerda Canadá a la inversión minera por sobre todo lo demás, incluida la vida de las personas.

El mandato oficial de la Oficina Interinstitucional no mencionaba que su papel clave sería la recopilación de inteligencia de estilo militar. El Acuerdo Gubernativo para su creación fue presentado a la Procuraduría General de la República, pero no se publicó de manera oficial (Solano 2015). En él, se indica que el propósito del grupo era “elaborar recomendaciones, políticas, estrategias y proyectos de carácter político, social,

---

34 GAC. Archivo de SAI A-2017-00649: 5.

económico y de seguridad al Consejo Nacional de Seguridad para la atención integral de la problemática de seguridad, generada por la exploración y explotación de recursos naturales no renovables” (Hernández 2014). Sin embargo, las actas de doce reuniones de la Oficina Interinstitucional celebradas entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014, a las que accedieron Granovsky-Larsen y Weisbart (2021: 7-8) demuestran que

el interés del grupo radicaba principalmente en la seguridad y operación de la mina, y solo al pasar, en el desarrollo local. ... Las actas de seis de las doce reuniones documentan explícitamente discusiones acerca de los grupos de oposición, las protestas o [votaciones] comunitarias.

En efecto, conforme indican Granovsky-Larsen y Weisbart (2021), lejos de centrarse en el “desarrollo integral”, la comisión realizaría actividades de recopilación de inteligencia sobre miembros de la oposición a la mina Escobal en junio y julio de 2013.

La justificación oficial del Estado guatemalteco con respecto al estado de excepción en el área de la mina fue hacer frente al crimen organizado. De hecho, entre finales de 2012 y principios de 2013, miembros de la resistencia pacífica señalaron la desaparición de explosivos de la mina en noviembre de 2012, el asesinato de dos guardias de seguridad en el yacimiento en enero de 2013 y el secuestro de un grupo de cuatro representantes indígenas xinka en marzo de 2013 como indicadores de la presencia de grupos criminales. Sin embargo, existen notables diferencias en las interpretaciones de cómo y en interés de quién operaban estos grupos armados clandestinos. Los miembros de la resistencia suponían que se estaban utilizando los incidentes como un montaje para criminalizarlos, así como para intensificar la violencia y quebrantar su organización pacífica (Alerta Minera 2017; Solano 2015). Un grupo de ONG internacionales indicó estas mismas preocupaciones en una carta abierta en febrero de 2013, instando a la CICIG a investigar los incidentes (Alerta Minera 2013b). El Estado, por su parte, se sirvió de estos eventos como un pretexto para declarar el estado de excepción y aumentar la presencia militar en las cercanías a la mina, creando una ola de temor para acallar la organización comunitaria lo suficiente para que la empresa pudiera poner en funcionamiento a la mina en enero de 2014.

Los correos de la Embajada obtenidos mediante la Ley de Acceso a la Información revelan que Tahoe compartió datos sobre la Oficina Interinstitucional con el embajador y altos funcionarios de la Embajada. Si bien no logramos obtener documentos que confirmaran lo que la Embajada sabía sobre la Oficina Interinstitucional previo a su establecimiento, sabemos que Tahoe solicitó una reunión de veinte minutos con el embajador un día antes de su inauguración oficial<sup>35</sup>. Dado el nivel de comunicación entre la Embajada y Tahoe, resulta probable que la empresa haya compartido información con el embajador sobre el inminente anuncio. En un correo electrónico del 2 de junio de 2013, Tahoe le envió a la Embajada más información sobre la Oficina Inter-

---

35 GAC. Archivo de SAI AI-2016-02454/LB: 4-5.

institucional, incluido un informe del 13 de mayo que describe a su personal<sup>36</sup>, e indicó que la empresa y la comisión se habían reunido para hablar del proyecto Escobal<sup>37</sup>. En un informe de junio de 2013 sobre la RSC se indica además que el equipo de relaciones comunitarias de la empresa ayudó a la comisión a encontrar el espacio para instalar la oficina en San Rafael Las Flores<sup>38</sup>.

Si la Embajada hubiera tenido inquietudes o hubiera querido saber más sobre la nueva comisión militarizada de alto nivel, podría haberse reunido con el ministro López Bonilla quien, como se mencionó anteriormente, también formaba parte de la Oficina Interinstitucional. Si bien existen dos cartas del embajador Rousseau dirigidas a López Bonilla<sup>39</sup>, del 27 de mayo y 27 de agosto de 2013, el contenido de ambas está censurado en su totalidad. La Embajada continuó brindando el apoyo de su cuerpo diplomático al proyecto Escobal durante este período en que entró en funcionamiento la Oficina Interinstitucional<sup>40</sup> a pesar de saber del alto nivel de corrupción interna del Estado guatemalteco, de la prevalencia del crimen organizado en todo el país y de la posibilidad de un mayor nivel de violencia que implicaba una operación militarizada en la región.

## **Tahoe Resources: un caso de identidad canadiense intermitente**

En septiembre de 2013, el subdirector de comercio para Centroamérica y el Caribe, Peter Egyed, informó que “Tahoe Resources no cumple con los requisitos de admisibilidad al Servicio de Delegados Comerciales ya que mantiene mínimos vínculos económicos con Canadá y su sede yace en Reno, Nevada”<sup>41</sup>. No hizo mención de la violencia y las amenazas a las comunidades que habían motivado la protesta internacional (Alerta Minera 2013c). Ante la situación, el abogado general de Tahoe envió una carta al director general del Servicio de Delegados Comerciales, Duane McMullen, solicitando

---

36 Según un documento adjunto al correo electrónico, el equipo de la comisión interinstitucional incluía al ministro de Energía y Minas, Erick Archila, al ex teniente coronel y entonces ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, al secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, José María Argueta, a la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Roxana Sobenes, al procurador general, Vladimir Aguirre, y al comisionado presidencial del Diálogo Nacional, Miguel Ángel Balcárcel (GAC. Archivo de SAI AI-2016-02454/LB).

37 GAC. Archivo de SAI AI-2016-02454: 35. Cabe destacar que este informe, que se otorgó sin secciones censuradas mediante una solicitud de acceso a la información de 2016 (Archivo 2016-02454: 35), estaba casi completamente censurado al solicitarse nuevamente en 2017 (Archivo A-2017-00685). En la versión de 2016, se adjuntó a un correo electrónico de Tahoe del 2 de junio de 2013 dirigido a Nathalie Samson agradeciéndole por organizar la reunión sobre las actividades de RSC de la empresa.

38 GAC. Archivo de SAI AI-2016-02454: 7.

39 GAC. Archivo de SAI A-2017-00649: 5, 14, 15.

40 GAC. Archivo de SAI AI-2016-02454: 6, 14-37.

41 GAC. Archivo de SAI A7040-17-839: 14.

se reestablecieran los servicios. En ella indicaba:

durante los últimos 3 años Tahoe ha enfocado la totalidad de su energía y sus recursos en la construcción de Escobal, nuestra única mina. *Durante ese tiempo, hemos colaborado con la Embajada de Canadá en Guatemala, la cual ha sido una firme defensora de los intereses canadienses*<sup>42</sup>. (sin resaltar en el original)

Unos meses después de que la mina Escobal entrara en operación comercial en enero de 2014, la Embajada desestimó las acusaciones de actos indebidos por parte de Tahoe ante el asesinato de la activista de 16 años de edad, Topacio Reynoso, y el atentado contra su padre, Alex, en abril de 2014. Ambos participaban activamente en la resistencia a la mina Escobal. La Embajada informó sobre el incidente como un “ataque personal” que ocurrió en Palenque, “un evento local que, entre otras cosas, incluye peleas callejeras”<sup>43</sup>. Nathalie Samson, encargada de negocios, admitió que sabía que “algunas personas, que podrían ser empleados de la minera” podrían haber estado involucradas en el incidente, pero no instó a una investigación completa e imparcial. Cuando el tema de las tasas de regalías surgió nuevamente, la Embajada buscó la opinión de Tahoe y presionó en beneficio de la empresa. En diciembre de 2014, el Congreso de Guatemala aprobó un aumento en las regalías mineras obligatorias del 1 al 10 por ciento. Según la Embajada, esto “[lo convirtió] en uno de los niveles menos atractivos del continente americano”<sup>44</sup>.

Al igual que en 2012, la Embajada coordinó su respuesta estrechamente con la industria. Llegó a un “punto de vista compartido” con los “principales actores del sector privado”<sup>45</sup>. Si bien el punto de vista en sí ha sido censurado, en opinión de la Embajada, el “sector [afrentaba] la situación más difícil en la historia reciente”. La Embajada expresó su preocupación de que el gobierno guatemalteco no estuviera satisfecho con los acuerdos voluntarios de regalías negociados en abril de 2013. Tahoe le confirmó a la Embajada que examinaría su estrategia de contribución, “tanto por el aumento del 100% en las regalías como para intentar forzar un grado de transparencia en la redistribución del 9% que ahora va directamente al gobierno central”<sup>46</sup>. Tanto la Embajada como la empresa parecían estar al tanto de los altos niveles de corrupción que llevarían a que la mayor parte del gobierno de Pérez Molina cayera presa en 2015<sup>47</sup>.

El 5 de diciembre, Nathalie Samson escribió a sus colegas que una delegación de políticos guatemaltecos, a quienes se refiere como “nuestros interlocutores guate-

---

42 GAC. Archivo de SAI A7040-17-839: 102.

43 GAC. Archivo de SAI A201900012: 29–31.

44 GAC. Archivo de SAI A2017-02339: 257–58.

45 A2017023339: 246.

46 A2017023339: 246.

47 GAC. Archivo de SAI A201302339: 158.



maltecos”, había viajado a Ottawa la semana anterior<sup>48</sup>. Transmitió su “agradecimiento por la cálida bienvenida que recibieron y su profunda satisfacción” con la visita, cuyos detalles están censurados. Indicó que las consultas internas comenzarían la semana siguiente y que CANCHAM alentaría a Guatemala a aceptar su propuesta, que no describió.

Cinco días después, el ministro de Energía y Minas, Erick Archila, actualmente prófugo de la justicia por un caso de corrupción, declaró a la prensa que el aumento de regalías no afectaría al sector minero porque “las empresas saben que Guatemala se rige por una certeza jurídica y están sabidas que este país les puede ofrecer niveles importantes de inversión y –seguridad– que el trabajo de la gente guatemalteca es hacer bien las cosas”<sup>49</sup>. Más allá de la influencia que el cabildeo de la Embajada pueda haber tenido en esta decisión, queda claro que su estrategia involucró consultas con Tahoe y benefició a la empresa.

Al tratarse de las demandas de la comunidad para responsabilizar a la empresa por la violencia en la mina Escobal, los funcionarios canadienses se escudaron nuevamente con la idea de que Tahoe no era lo suficientemente canadiense. En junio de 2014, siete personas que resultaron heridas en el tiroteo a la entrada de la mina el 27 de abril de 2013 presentaron una demanda civil contra Tahoe Resources en los tribunales de Columbia Británica. Peter Egyed, subdirector de comercio para Centroamérica y el Caribe, informó sobre este caso a sus colegas en abril de 2015, indicando “quizás recuerden que Tahoe Resources fue objeto de nuestra evaluación en septiembre de 2013, en cuanto a si cumplía con los requisitos de admisibilidad al Servicio de Delegados Comerciales”<sup>50</sup>. Además, circuló un segundo artículo donde señalaba que la “oficina central de Tahoe está en Reno, Nevada (con un equipo ejecutivo predominantemente estadounidense, salvo [censurado]). No tiene operaciones y casi ningún proveedor en Canadá”<sup>51</sup>. Jennifer Rosebrugh, subdirectora de la Unidad de Apoyo a Servicios [Post Support Unit], re-envió el mensaje de Egyed, agregando que “al final dictaminamos que no reunía los requisitos de admisibilidad al Servicio de Delegados Comerciales, a pesar de que enviaron a un cabildero en varias ocasiones para argumentar lo contrario, que de hecho sí era canadiense”<sup>52</sup>.

Si bien Tahoe permaneció lo suficientemente cerca de la Embajada como para beneficiarse de su cabildeo contra cualquier aumento de regalías, no era lo suficientemente canadiense a los ojos del servicio exterior como para rendir cuentas en Canadá por la violencia que involucraba directamente a sus guardias de seguridad privada.

---

48 A201302339: 250.

49 GAC. Archivo de SAI A201501699: 37.

50 GAC. Archivo de SAI A201900012: 80-81

51 GAC. Archivo de SAI A7040-17-839: 77.

52 GAC. Archivo de SAI A201900012: 80.

## Conclusión

Reconocemos que la solicitud de documentos mediante la Ley de Acceso a la Información implica una serie de importantes limitaciones. No obstante, la evidencia que brindan los miles de páginas de documentos de la Embajada ilustra el apoyo decisivo que el cuerpo diplomático canadiense brindó a Tahoe Resources para superar los riesgos políticos y sociales en la tramitación de la licencia de explotación, la puesta en operaciones de la mina Escobal en enero de 2014 y la maximización de sus ganancias. Dado su conocimiento sobre la amplia oposición local al proyecto y su experiencia con otros conflictos mineros en los que había intervenido en el país, la Embajada sabía que su apoyo a la empresa fomentaría la conflictividad. El resultado incluyó una mayor represión, militarización y vigilancia de las comunidades en resistencia, así como un ataque armado hacia manifestantes pacíficos el 27 de abril de 2013 por parte de la seguridad privada. La subsiguiente “enérgica campaña” a favor de Tahoe no hizo más que reforzar un estado militarizado de temor en las comunidades de los alrededores de la mina, incluido el aumento de la persecución legal de miembros de la resistencia y de sus partidarios. En el período previo a la aprobación de la licencia, la Embajada coordinó estrechamente con Tahoe Resources, así como con la Embajada de Estados Unidos y las cámaras de comercio locales, presionando al gobierno guatemalteco para proteger y promover la inversión minera canadiense.

Nuestro análisis confirma el vínculo que observa Roy Grégoire (2019) entre la política de Canadá y los discursos racistas para deslegitimar la resistencia comunitaria en Guatemala. Los funcionarios canadienses demostraron actitudes racistas y colonialistas hacia las comunidades indígenas y no indígenas en resistencia y no respondieron a los llamados de organizaciones locales e internacionales solicitando intervenciones más constructivas. Repetidamente, la Embajada se respaldó en las principales suposiciones estereotipadas con que la oligarquía guatemalteca deslegitima la resistencia comunitaria ante megaproyectos, al cuestionar la legitimidad de la resistencia insinuando que las comunidades son manipuladas o están mal informadas. Las autoridades canadienses insisten en que la minería es beneficiosa para las comunidades, y se niegan a aceptar la legitimidad de la oposición comunitaria a este modelo de desarrollo violento y destructivo. La fama que se hacía la Embajada de ser un mediador neutro solo llegó a disimular parcialmente su continuo compromiso con la empresa; entre el 2012 y el 2014, el cuerpo diplomático no realizó intento significativo alguno de escuchar a miembros de la comunidad u organizaciones aliadas que continuamente planteaban serias preocupaciones y se oponían al proyecto Escobal.

Lo que resulta aún más preocupante es la colaboración de la Embajada con la empresa y funcionarios del gobierno, incluidos ciertos miembros que ejercieron un rol directo en el genocidio de la década de los 80, para imponer la mina a personas que claramente no la querían, ni la quieren, a pesar de saber sin lugar a duda de la operación continua de grupos armados clandestinos y del racismo estructural en Guatemala. El

enfoque de la Embajada se apoya exclusivamente en las ganancias del sector privado, mientras que su diplomacia se basa en suposiciones racistas y paternalistas sobre las comunidades afectadas y contribuye a una mayor militarización de los yacimientos “estratégicos”, así como a la persecución y violencia contra las y los defensores de la tierra y el medio ambiente. A pesar del muy publicitado ataque armado contra manifestantes pacíficos el 27 de abril de 2013, el cuerpo diplomático canadiense se mantuvo a favor de Tahoe mediante la participación de la Embajada en la ceremonia pública de la empresa y el gobierno guatemalteco para celebrar el acuerdo voluntario de regalías cuando las comunidades ya habían votado un rotundo no a la minería.

Entre el 2012 y el 2014, la Embajada cambió de opinión sobre la identidad de Tahoe, dependiendo de lo que pareciera más conveniente en cada caso. Se la consideraba “canadiense” a la empresa para justificar el acceso a sus servicios diplomáticos completos y se volvía una “empresa estadounidense” cuando la Embajada precisaba una excusa para no responder a las solicitudes de defensores de la tierra y el medio ambiente o rendir cuentas ante los tribunales canadienses. Mientras tanto, Tahoe, al igual que muchas otras mineras registradas en Canadá y que cotizan en las bolsas de valores canadienses, mantenía limitados vínculos económicos con ese país, sin que esto impidiera su acceso a los servicios del cuerpo diplomático canadiense, incluso cuando dejó de considerarse que reunía los requisitos de admisibilidad para el Servicio de Delegados Comerciales. En definitiva, observamos que el cuerpo diplomático canadiense cumple la función de administrador de riesgos para el capital canadiense y sus actividades benefician principalmente a un grupo reducido de la élite local y transnacional.

Para el 2019, Tahoe estaba sintiendo los efectos financieros de la suspensión de la mina Escobal en junio de 2017 debido a la acción directa de la comunidad y a una orden judicial para suspender la mina por falta de consulta previa con el pueblo indígena Xinka. Para entonces, la empresa había utilizado las ganancias de Escobal para la compra de cuatro proyectos mineros en Canadá y Perú. La brutal campaña militarizada contra la resistencia pacífica y la absoluta falta de respuesta, de parte de la Embajada, ante las múltiples solicitudes de apoyo frente a la criminalización, las amenazas y la violencia es parte de la razón por la cual las comunidades continúan rechazando toda actividad minera, incluso con la presencia de un nuevo propietario, Pan American Silver, con sede en Vancouver, que adquirió a Tahoe en febrero de 2019. Una de las primeras acciones de Pan American como propietaria del proyecto fue llegar a una resolución con respecto a la demanda civil en Columbia Británica (Pan American Silver 2019b). La empresa afirmaba que esto ayudaría a demostrar su “buena voluntad” (Borden Ladner Gervais LLP 2019) ante la comunidad y que podría ayudar a que la mina vuelva a entrar en operaciones.

Nos encontramos ante la primera instancia en que se llega a un acuerdo para concluir una demanda en Canadá contra una minera canadiense por abusos cometidos en el extranjero. Desde un punto de vista, se podría considerar ésta una victoria

en el contexto de la labor a largo plazo para responsabilizar a empresas mineras en Canadá, lo cual los demandantes consideran como un aspecto positivo (Alerta Minera 2019b). Sin embargo, como indicaron los demandantes en su declaración pública sobre el acuerdo, ni la empresa, ni las autoridades de Guatemala, ni la diplomacia canadiense han abordado los problemas subyacentes que llevaron a la demanda. Emy Gómez, coordinadora de proyectos del Parlamento Xinka, indica “Seguiremos resistiendo al proyecto Escobal que nos ha robado la paz en nuestras comunidades y que pone en gran riesgo nuestro territorio, el agua y la salud” (Alerta Minera 2019b). Para lograr una verdadera resolución de este conflicto, debemos ir más allá de la noción neoliberal del diálogo y los supuestos intereses canadienses, incluir las voces de las comunidades locales y respetar su autodeterminación en cuanto al modelo de desarrollo que les interesa.

# Referencias

- Amnesty International Canada. 2016. "We are defending the land without blood: defenders of the land, territory and environment in Honduras and Guatemala." <[amnesty.ca/sites/amnesty/files/Honduras%20Guatemala%20HRD%20-%20Report%20ENG.PDF](https://www.amnesty.ca/sites/amnesty/files/Honduras%20Guatemala%20HRD%20-%20Report%20ENG.PDF)>.
- Associated Press in Guatemala City. 2019. "Guatemala in grip of 'mafia coalition', says UN body in scathing corruption report." August 28. The Guardian. <[theguardian.com/world/2019/aug/28/guatemala-corruption-mafia-coalition-jimmy-morales](https://www.theguardian.com/world/2019/aug/28/guatemala-corruption-mafia-coalition-jimmy-morales)>.
- Borden Ladner Gervais LLP. 2019. "Pan American Silver Resolves Human Rights Claim Against Tahoe." September 24. <[lexology.com/library/detail.aspx?g=0b3c4382-2d3d-4aa3-97b2-642dc10fa0ca](https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0b3c4382-2d3d-4aa3-97b2-642dc10fa0ca)>.
- Bouw, Brenda. 2010. "Kevin McArthur has mining in his blood." The Globe and Mail. <[theglobeandmail.com/globe-investor/kevin-mcarthur-has-mining-in-his-blood/article4322214/](https://www.theglobeandmail.com/globe-investor/kevin-mcarthur-has-mining-in-his-blood/article4322214/)>.
- Canada. 2009a. "Seizing Global Advantage: Commerce Strategy for Securing Canada's Growth & Prosperity." <[international.gc.ca/commerce/assets/pdfs/gcs-en.pdf](https://www.international.gc.ca/commerce/assets/pdfs/gcs-en.pdf)>.
- . 2009b. "Building the Canadian Advantage: A CSR Strategy for the International Extractive Sector." <[nrcan.gc.ca/mining-materials/publications/8776](https://www.nrcan.gc.ca/mining-materials/publications/8776)>.
- . 2013. "Global Markets Action Plan: Blueprint for Creating Jobs and Opportunities for Canadians Through Trade." <[international.gc.ca/global-markets-marches-mondiaux/assets/pdfs/plan-eng.pdf](https://www.international.gc.ca/global-markets-marches-mondiaux/assets/pdfs/plan-eng.pdf)>.
- . 2014. "Canada's Enhanced Corporate Social Responsibility Strategy to Strengthen the Extractive Sector Abroad." <[international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng](https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng)>.
- Casaús Arzú, M.E. 2010. Guatemala: Linaje y racismo, 4th ed. F & G, Guatemala.
- CICIG (Commission against Impunity in Guatemala). 2019. Mandato y Acuerdo CICIG. CICIG. [www.cicig.org/cicig/mandato-y-acuerdo-cicig](https://www.cicig.org/cicig/mandato-y-acuerdo-cicig)
- . 2016. "Caso La Cooperacha." June 11. CICIG. <[cicig.org/casos/caso-la-cooperacha/](https://www.cicig.org/casos/caso-la-cooperacha/)>.
- Contreras, Geovanni. 2012. "Canadá promete continuar apoyo." December 7. <[issuu.com/prensalibregt/docs/plmt07122012](https://www.issuu.com/prensalibregt/docs/plmt07122012)>.
- Cuffe, Sandra. 2013. "State of Siege: Mining Conflict Escalates in Guatemala." <[upsidedownworld.org/archiv/uatemalaala/state-of-siege-mining-conflict-escalates-in-guatemala/](https://www.upsidedownworld.org/archiv/uatemalaala/state-of-siege-mining-conflict-escalates-in-guatemala/)>.
- Denault, Alan and Sacher, William. 2012. Imperial Canada Inc.: Legal Haven of Choice for the World's Mining Industries. Vancouver, Canada: Talon Books.
- Dougherty, Michael L. 2016. "Scarcity and control: the new extraction and Canada's resource protection network." In Deonandan, Kalowatie. & Dougherty, Michael L. (Eds). Mining in Latin America: Critical Approaches to the New Extraction. London: Routledge.

- Doyle, Kate. 2012. "In the pursuit of Justice in Guatemala." The National Security Archive. National Security Archive Electronic Briefing Book No. 373. <[nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB373/index.htm](http://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB373/index.htm)>. March 23, 2012.
- García, Adolfo Agustín, García Monroy, Luis Fernando., Castillo Pérez, Erick Fernando., Castillo Herrera, Artemio Humberto., Pérez Martínez, Wilmer Francisco., Aguilar Castillo, Noë., and Martínez Sasvín, Misael Eberto v. Tahoe Resources. 2014. Notice of Civil Claim. June 18. <[tahoeontrial.files.wordpress.com/2014/06/notice\\_civil\\_claim.pdf](http://tahoeontrial.files.wordpress.com/2014/06/notice_civil_claim.pdf)>.
- Global Affairs Canada (GAC). 2020. "History of Global Affairs Canada." <[international.gc.ca/gac-amc/history-histoire/index.aspx?lang=eng](http://international.gc.ca/gac-amc/history-histoire/index.aspx?lang=eng)>.
- . 2013. "Diplomatic Missions and Consular Posts Accredited to Canada." <[international.gc.ca/protocol-protocole/missions.aspx?lang=eng](http://international.gc.ca/protocol-protocole/missions.aspx?lang=eng)>.
- Gordon, Todd. and Webber, Jefferey R. 2016. Blood of Extraction: Canadian Imperialism in Latin America. Black Point: Fernwood Publishing.
- Granovsky-Larsen, Simon. 2018. "Terror in Guatemala." June 21. NACLA. <[nacla.org/news/2018/06/21/terror-guatemala](http://nacla.org/news/2018/06/21/terror-guatemala)>.
- Granovsky-Larsen, Simon., & Caren Weisbart. Forthcoming. "Tahoe Resources' Violent Mining Operation." In Catherine Nolin and Russell, Grahame (Eds.). Mining in a time of impunity in the aftermath of Guatemala's genocide: The violence of contemporary predatory mineral exploitation.
- Hernández, Oswaldo J. 2014. "El Gobierno crea en secreto un Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros." Plaza Pública. July 16. <[plazapublica.com.gt/La%20oposici%C3%B3n%20a%20la%20miner%C3%ADa%20nueva%20amenaza%20a%20la%20seguridad%20nacional](http://plazapublica.com.gt/La%20oposici%C3%B3n%20a%20la%20miner%C3%ADa%20nueva%20amenaza%20a%20la%20seguridad%20nacional)>
- IACHR (Inter-American Commission for Human Rights). 2014. "The Impact of Canadian Mining in Latin America and Canada's Responsibility. Executive Summary of the Report submitted to the Inter-American Commission on Human Rights." <[dplf.org/sites/default/files/report\\_canadian\\_mining\\_executive\\_summary.pdf](http://dplf.org/sites/default/files/report_canadian_mining_executive_summary.pdf)>.
- . 2015. "Indigenous Peoples, Afro-Descendent Communities and Natural Resources: Human Rights Protection in the Context of Extraction, Exploitation, and Development Activities." <[oas.org/en/iachr/reports/pdfs/ExtractiveIndustries2016.pdf](http://oas.org/en/iachr/reports/pdfs/ExtractiveIndustries2016.pdf)>.
- Imai, Shin, Gardner, Leah and Weinberger, Sarah. 2017. "The 'Canada Brand': Violence and Canadian Mining Companies in Latin America." Osgoode Legal Studies Research Paper No. 17.
- Inter Pares. 2009. "Land and Conflict: Resource Extraction, Human Rights, and Corporate Social Responsibility: Canadian Companies in Colombia." <[miningwatch.ca/sites/default/files/Land-and-Conflict.pdf](http://miningwatch.ca/sites/default/files/Land-and-Conflict.pdf)>.
- JCAP (Justice and Corporate Accountability Project). 2017. "Request to investigate Tahoe Resources for failure to disclose material information." <[justice-project.org/wp-content/uploads/2017/07/final-bcsc-disclosure-complaint-re-tahoe-may-15-2017.pdf](http://justice-project.org/wp-content/uploads/2017/07/final-bcsc-disclosure-complaint-re-tahoe-may-15-2017.pdf)>.
- Kamphuis, Charis. 2012. "Canadian Mining Companies and Domestic Law Reform: A Critical Legal Account." German Law Journal 13(9).

- . 2018. "Canadian Economic Diplomacy: Policy Gaps, Human Rights Impacts & Recommendations." Submission to the United Nations Working Group on Business & Human Rights on behalf of the Justice & Corporate Accountability Project.
- Laplante, J. P. & Catherine Nolin. 2014. "Consultas and Socially Responsible Investing in Guatemala: A Case Study Examining Maya Perspectives on the Indigenous Right to Free, Prior, and Informed Consent, Society and Natural Resources." *Society and Natural Resources: An International Journal* 27.
- M3. 2014. "Escobal mine Guatemala: NI 43-101 Feasibility Study." November 5. <[mda.com/Portals/0/MDA/Reports/Escobal\\_FS\\_2014.pdf](http://mda.com/Portals/0/MDA/Reports/Escobal_FS_2014.pdf)>.
- Menchu, Sofia and Pretel, Enrique. 2015. "Exclusive: U.S. pressed Guatemala's Perez to back corruption probes that toppled him." September 4. Reuters. <[reuters.com/article/us-guatemala-corruption-usa-exclusive-idUSKCN0R41SE20150904](http://reuters.com/article/us-guatemala-corruption-usa-exclusive-idUSKCN0R41SE20150904)>.
- MiMundo.org. 2013. "Escobal Mine Signing Ceremony." <[mimundo.photoshelter.com/gallery-image/2013-04-Escobal-Mine-Signing-Ceremony/G0000ZRXLceE6xD8/I0000UU0XOYtQhWM/C0000cpKO\\_Cp0Z38/](http://mimundo.photoshelter.com/gallery-image/2013-04-Escobal-Mine-Signing-Ceremony/G0000ZRXLceE6xD8/I0000UU0XOYtQhWM/C0000cpKO_Cp0Z38/)>.
- MiningWatch. 2013a. "Corruption, Murder and Canadian Mining in Mexico: The Case of Blackfire Exploration and the Canadian Embassy." May. <[miningwatch.ca/sites/default/files/blackfire\\_embassy\\_report-web.pdf](http://miningwatch.ca/sites/default/files/blackfire_embassy_report-web.pdf)>.
- . 2013b. "Canadian and US Organizations Call for Investigation into Recent Violence at Canadian Owned Mines in Guatemala." February 28. <[miningwatch.ca/news/2013/2/28/canadian-and-us-organizations-call-investigation-recent-violence-canadian-owned-mines](http://miningwatch.ca/news/2013/2/28/canadian-and-us-organizations-call-investigation-recent-violence-canadian-owned-mines)>.
- . 2013c. "Complaint Asks Ontario Securities Commission to Investigate Tahoe Resources After Wiretap Evidence Implicates Employees in Violence at Guatemala Mine." June 3. <[miningwatch.ca/news/2013/6/3/complaint-asks-ontario-securities-commission-investigate-tahoe-resources-after-wiretap](http://miningwatch.ca/news/2013/6/3/complaint-asks-ontario-securities-commission-investigate-tahoe-resources-after-wiretap)>.
- . 2015a. "In the National Interest? Criminalization of Land and Environment Defenders in the Americas." <[miningwatch.ca/sites/default/files/inthenationalinterest\\_fullpaper\\_eng\\_1.pdf](http://miningwatch.ca/sites/default/files/inthenationalinterest_fullpaper_eng_1.pdf)>.
- . 2015b. "Unearthing Canadian Complicity: Excellon Resources, the Canadian Embassy, and the Violation of Land and Labour Rights in Durango, Mexico." <[miningwatch.ca/sites/default/files/excellon\\_report\\_2015-02-23.pdf](http://miningwatch.ca/sites/default/files/excellon_report_2015-02-23.pdf)>.
- . 2017. "Guatemalans Denounce Tahoe Resources' Plan to 'Pick Them Apart.'" October 16. <[miningwatch.ca/blog/2017/10/16/guatemalans-denounce-tahoe-resources-plan-pick-them-apart](http://miningwatch.ca/blog/2017/10/16/guatemalans-denounce-tahoe-resources-plan-pick-them-apart)>.
- . 2019a. "Abarca family files with Federal Court of Appeal insisting that Canadian Embassy in Mexico must be investigated." August 19. <[miningwatch.ca/news/2019/8/19/abarca-family-files-federal-court-appeal-insisting-canadian-embassy-mexico-must-be](http://miningwatch.ca/news/2019/8/19/abarca-family-files-federal-court-appeal-insisting-canadian-embassy-mexico-must-be)>.
- . 2019b. "Plaintiffs Conclude Lawsuit with Pan American Silver over 2013 Shooting in Guatemala, Communities Reaffirm Opposition to Escobal Mine, Warn of Rising Tensions." July 31. <[miningwatch.ca/news/2019/7/31/plaintiffs-conclude-lawsuit-pan-american-silver-over-2013-shooting-guatemala](http://miningwatch.ca/news/2019/7/31/plaintiffs-conclude-lawsuit-pan-american-silver-over-2013-shooting-guatemala)>.
- Moore, Jennifer. 2013. "Canadian Embassy snubs family of slain Mexican activist." September 4. <[mineandcommunities.org/article.php?a=12443](http://mineandcommunities.org/article.php?a=12443)>.

- Moore, Jennifer & Teresa Velásquez. 2012. "Sovereignty Negotiated: Anti-mining movements, the state and multinational mining companies under Correa's 21st Century Socialism," In Anthony Bebbington ed., *Social Conflict, Economic Development and Extractive Industries: Evidence from South America*, London: Routledge.
- NISGUA. 2013. "Guatemalan gov't declares state of siege in municipalities surrounding Tahoe Escobal mine." May 3. <[nisgua.blogspot.com/2013/05/guatemalan-govt-declares-state-of-siege.html](http://nisgua.blogspot.com/2013/05/guatemalan-govt-declares-state-of-siege.html)>.
- Pan American Silver 2019a. "Pan American Silver completes acquisition of Tahoe Resources." <[panamericansilver.com/news/news-releases/detail/76/2019-02-22-pan-american-silver-completes-acquisition-of-tahoe-resources](http://panamericansilver.com/news/news-releases/detail/76/2019-02-22-pan-american-silver-completes-acquisition-of-tahoe-resources)>.
- . 2019b. "Pan American Silver Announces Resolution of Garcia v. Tahoe Case." July 30. <[panamericansilver.com/news/news-releases/detail/84/2019-07-30-pan-american-silver-announces-resolution-of-garcia-v-tahoe-case](http://panamericansilver.com/news/news-releases/detail/84/2019-07-30-pan-american-silver-announces-resolution-of-garcia-v-tahoe-case)>.
- . n.d. "Escobal: Santa Rosa, Guatemala." <[panamericansilver.com/operations/north-and-central-america/escobal/](http://panamericansilver.com/operations/north-and-central-america/escobal/)>.
- Peacock and Beltrán. 2003. *Poderes Ocultos en la Guatemala post conflicto Grupos armados ilegales y las fuerzas detrás de ellos*. Washington D.C.: Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
- Prensa Libre. 2013. "Encuesta: Aumenta rechazo a actividad minera en Guatemala." January 16. <[noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-guatemala/encuesta-aumenta-rechazo-a-actividad-minera-en-guatemala](http://noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-guatemala/encuesta-aumenta-rechazo-a-actividad-minera-en-guatemala)>.
- Roy Grégoire, Etienne. 2019. "Dialogue as racism? The promotion of "Canadian dialogue" in Guatemala's extractive sector." *The Extractive Industries and Society*. 6.
- Schnoor v. Canada. 2009. "Canadian ambassador sued for defaming documentary film maker Steven Schnoor." n.d. <[schnoorversuscanada.ca](http://schnoorversuscanada.ca)>.
- Shiple, Tyler. 2017. *Ottawa and Empire: Canada and the Military Coup in Honduras*. Toronto: Between the Lines.
- Silva Ávalos, Héctor. 2017. "Guatemala Ex-Minister Used Police to Escort Cocaine Shipments: US." *Insight Crime*. June 28. <[insightcrime.org/news/analysis/guatemala-ex-minister-used-police-escort-cocaine-shipments-us/](http://insightcrime.org/news/analysis/guatemala-ex-minister-used-police-escort-cocaine-shipments-us/)>.
- Solano, Luis. 2005. *Guatemala petróleo y minería en las entrañas del poder*. Guatemala: Inforpress Centroamericana.
- . 2011. "En manos de quién estará la seguridad en el futuro gobierno del PP." November 28. <[albedrio.org/htm/documentos/EnfoqueAnálisisSituación182011.pdf](http://albedrio.org/htm/documentos/EnfoqueAnálisisSituación182011.pdf)>.
- . 2015. "Under Siege: Peaceful Resistance to Tahoe Resources and Militarization in Guatemala." November 10. <[tahoeontrial.files.wordpress.com/2015/11/undersiege\\_luissolanoreport\\_2015.pdf](http://tahoeontrial.files.wordpress.com/2015/11/undersiege_luissolanoreport_2015.pdf)>.
- Studnicki-Gizbert, Daviken. 2016. "Canadian mining in Latin America (1990 to present): A Provisional History." *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies* 41, 1.



- Tahoe on Trial. 2015a. "Wiretap Transcripts Raise Troubling Questions about Tahoe Resources Militarized Security Detail." April 7. <[tahoeontrial.net/2015/04/07/wiretap-transcripts-raise-troubling-questions-about-tahoe-resources-militarized-security-detail/](http://tahoeontrial.net/2015/04/07/wiretap-transcripts-raise-troubling-questions-about-tahoe-resources-militarized-security-detail/)>.
- . 2015b. "Security footage outside Escobal mine – April 27, 2013." November 19. <[tahoeontrial.net/2015/11/19/security-footage-april-27-2013/](http://tahoeontrial.net/2015/11/19/security-footage-april-27-2013/)>.
- . 2015c. "Wiretap transcripts raise troubling questions about Tahoe Resources' militarized security detail." April 7. <[tahoeontrial.net/2015/04/07/wiretap-transcripts-raise-troubling-questions-about-tahoe-resources-militarized-security-detail/](http://tahoeontrial.net/2015/04/07/wiretap-transcripts-raise-troubling-questions-about-tahoe-resources-militarized-security-detail/)>.
- TMX Group. 2020. "~47% of the World's Public Mining Companies are Listed on TSX and TSXV." Toronto Stock Exchange | TSX Venture Exchange. <[mining.tsx.com](http://mining.tsx.com)>
- UDEFEGUA (Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala). 2017. "Informe Criminalización en Guatemala: Análisis de situación 2012-2017." <[udefegua.org/wp-content/uploads/2017/12/Informe-Criminalizacio%CC%81n-Guatemala-2012-2017-FINAL3.pdf](http://udefegua.org/wp-content/uploads/2017/12/Informe-Criminalizacio%CC%81n-Guatemala-2012-2017-FINAL3.pdf)>.
- . 2010. "Criminalización, una forma de paralizar y debilitar la respuesta social." Guatemalan Human Rights Commission. ghrc-<[usa.org/Programs/HumanRightsDefenders/informe\\_udefegua\\_semestral.pdf](http://usa.org/Programs/HumanRightsDefenders/informe_udefegua_semestral.pdf)>.
- United States Institute for Peace. 1997. "Truth Commission: Guatemala." <[usip.org/publications/1997/02/truth-commission-guatemala](http://usip.org/publications/1997/02/truth-commission-guatemala)>.
- Weisbart, Caren. 2018. "Diplomacy at a Canadian Mine Site in Guatemala." *Critical Criminology*, 26 (1): 1-17.